

# Cuadernos del Sur

Número 2 ■ Abril-Junio de 1985

Tierra  fuego  
del

# Argentina: La transición y sus problemas

Alberto Spágnolo

(La historia) es similar a cada vida individual, tan ligera como ella, intolerablemente leve, ligera como una pluma, como polvo que gira en el viento, como cualquier cosa que ya no existirá mañana. (M. Kundera, *The unbearable lightness of being*, Harper and Row, 1984).

## 1. Lo genérico y lo particular

Esta afirmación de Kundera\* quizás sea el núcleo de esperanza que todo argentino lleva dentro de sí, azorado por cierta tozudez de los acontecimientos. Son tantas las veces y tan similares las circunstancias que se podría intentar la formulación de una *teoría de la transición*. Se trata de un ciclo político rutinario: desgaste civil, golpe militar, descomposición del núcleo dictatorial de turno, brusca politización de la sociedad, elecciones y retorno civil. Por teoría de la transición designamos el proceso económico, social y político multifacético que coloca como objetivo el ejercicio democrático, las libertades públicas y la manifestación plural y tolerante de las diferencias. Una transición a la democracia entendida como *forma*, como *mecanismo* para una gestión razonable de la pluralidad y la fragmentación.

La inminencia del acto electoral, punto culminante del desgaste, la descomposición y la búsqueda de salidas, permite trazar un cuadro descriptivo de las fuerzas. Desde el poder, la soberbia militar juega con el sueño de la "trascendencia", programa nuevas prerrogativas, intenta clausurar la posibilidad civil de revisar lo actuado, procura resguardar su capacidad interventora sobre la sociedad.

La oposición política, centrada en la actividad de los partidos tradicionales (peronismo y radicalismo) y animada por un acuerdo multipartidario que amplía el campo de las alianzas con los partidos menores, condensa las posibilidades civiles. Los partidos tradi-

\* La primera versión de este trabajo se presentó en una mesa redonda sobre las transiciones democráticas en el Cono Sur, llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en septiembre de 1984.

cionales vuelven a mostrar, como tantas veces, el monopolio de la cultura cívica y el señorío ejercido sobre la cultura política del conjunto de la sociedad; tantos años alejados de la experiencia estatal, sin embargo, los ha debilitado en el control sobre la cultura de los negocios. Si bien rápidamente se instalan en la escena política — punto crucial entre las oposiciones sociales y el poder estatal/militar— pesadamente se desplazan en el mundo empresario, en el ámbito de los negocios y de los programas económicos.

En la oposición social, mientras tanto, surgen vertientes y reagrupamientos que anuncian la modificación del mundo de los oficios, la alteración de las condiciones de existencia social como producto del periodo dictatorial. El rasgo común de estos aspectos novedosos, sin embargo, es la ausencia de integración plena con las expresiones políticas constituídas, la bifurcación de práctica social y práctica política, la incapacidad de los viejos partidos para expresar los nuevos rumbos en la lucha por la subsistencia y la vida. Algo más merece ser mencionado: la oposición social navega en momentos crítico-negativos, el esfuerzo de los enfrentamientos se dirige hacia la rendición de cuentas, hacia un retorno esclarecedor del pasado inmediato bajo los militares. Los encuentros intermitentes con las prácticas políticas de los grandes partidos clausuran, muchas veces, la construcción del momento positivo en la acción contestataria, la construcción de un proyecto de país. Cuando más, la revisión de lo actuado se asume como necesidad, como plataforma de algo que aún no existe y que merece ser discutido. La revisión como requisito de un nuevo proyecto social y político.

Estos rasgos genéricos de los contendientes — poder militar, oposición política y oposición social—, propios del momento previo al acto electoral y productos del periodo dictatorial tienen, en la actual transición, determinaciones que suenan a puntos culminantes en la historia contemporánea del país. Nunca antes el genocidio había sido norma, la guerra lenguaje universal y el terrorismo económico palanca transformadora de las condiciones de existencia social. Nunca tampoco, la violencia, el saqueo, la disputa por el botín y la total degradación moral habían atravesado a las Fuerzas Armadas como cuerpo social diferenciado.

Además de ello, un rasgo de especificidad de la actual transición se define a partir de su coexistencia con un largo periodo de crisis económica mundial y nacional que llevan implícitas, también, transformación, mutación, ingreso a un nuevo periodo histórico. En esta transición, corto y largo plazo, circunstancia y estructura, se mezclan en un abigarrado núcleo problemático. En torno a este as-

pecto, al menos cuatro problemas merecen ser mencionados en tanto son datos imprescindibles.

El primero de ellos se centra en lo que se conoce como segunda revolución industrial y a lo que a través de ella emerge como modificación radical de la producción real (crisis del fordismo, flexibilización de los sistemas productivos, diferenciación del consumo, aumento de los asalariados mediatos conocidos como autónomos, incrementos de productividad, nuevas economías de escala, etc.). Un segundo problema aparece con el proceso de integración capitalista creciente (zonas libres o francas, dislocamiento de los procesos productivos, acuerdos multinacionales de producción, agotamiento de la funcionalidad de las fronteras geográficas, creciente importancia de las dinámicas regionales, etc.). La modificación de las hegemonías en la economía mundial como sistema abierto y jerárquico es, sin duda, un elemento clave de la crisis; con ella se discuten hoy las nuevas formas de cohesión, los nuevos vínculos entre individuos, empresas y Estados. Por último, la síntesis de las dificultades puestas por la crisis se concentra en los cambios drásticos del sistema financiero (deuda generalizada, violencia monetaria, nuevas disciplinas y comportamientos inducidos, cortoplacismo e incobrabilidad, autonomía dineraria).

En fin, si tuviéramos que caracterizar en pocas palabras la especificidad de esta transición en Argentina escogeríamos los dos rasgos ya mencionados: momento culminante en la descomposición del país corporativo y confluencia, en él, de una modificación profunda de la dinámica capitalista que rebasa el ámbito del espacio nacional de valorización.

## 2. La necesidad de la política

Sabemos que la transición es amalgama de lo viejo y lo nuevo, conflicto entre los datos de un pasado que se resiste a morir y un presente que muestra posibilidades prematuras, referentes inacabados. Pero, ¿qué es lo viejo, qué elementos se constituyen en datos claves del pasado? He aquí una primera dificultad.

Lo viejo no es cronología; tampoco se reduce a experiencia reciente. Debe remitirnos, según pensamos, a nuestros *momentos constitutivos*, a las circunstancias conflictivas que determinaron los proyectos de país dominantes del escenario nacional. Los dos grandes proyectos—el del 80 del siglo pasado y el del peronismo de la década de los cuarentas—, contaron con la participación decisiva de un núcleo estatal clave, las Fuerzas Armadas. Este hilo invisible articu-

ló, a espaldas de los contendientes ocasionales, puntos importantes de unidad entre los proyectos, más allá de sus antagonismos y contradicciones. Así, desde el deben explicarse fenómenos tales como la militarización de la sociedad, la fusión Fuerzas Armadas-proyecto industrial, la jerarquía y la prepotencia en los vínculos sociales cotidianos, la debilidad de las instituciones políticas. Sobre todo, y no es un elemento intrascendente, es posible explicar la ideología de la Argentina Potencia que, manifiesto de suficiencia nacional en el proyecto del 80 fue consigna cohesionadora del retorno peronista en 1973. Nada quedó al margen de la presencia militar; nuestra propia historia fue contada siempre como gesta heroica de uniformados. La misma izquierda soñó siempre con la existencia salvadora de fracciones militares nacionalistas o patrióticas, o bien concibió múltiples modos para una convergencia cívico-militar revolucionaria. No es sólo torpeza política la del Partido Comunista Argentino que declaraba, por boca de Athos Fava, que “Un convenio nacional democrático permitirá superar el escollo de los condicionamientos que se mantienen, como el problema de los desaparecidos, al que sólo un acuerdo democrático de civiles y militares puede dar una solución esclarecedora” (semanario *HOY*, 10 de enero de 1981). Otras respuestas populares de diferente signo no quedaron al margen de escalas valorativas que resultaban de la presencia militar. Es como para ponerse a pensar si la estructura jerárquica y la asimilación de las responsabilidades políticas con los grados militares, típica de los Montoneros, no son expresión de la imposibilidad que nuestra sociedad tiene para liberarse de sus momentos constitutivos. Aún más, el desliz corporativo y gremial del “clasismo”, siendo expresión progresiva de sectores importantes de la clase obrera, ponía al desnudo el mismo conflicto. En síntesis, una sociedad presa de su circunstancia vital originaria, un Estado sometido permanentemente al asalto de las corporaciones, partidos políticos sin fuerza para disolver el impulso corporativo de la política, respuestas populares que internalizaban rápidamente la jerarquía, el autoritarismo y la prepotencia como formas orgánicas.

La corporación militar creó sujetos a su imagen y semejanza, expandió las posibilidades para otros nudos corporativos. Destacan, sin duda, la Iglesia y la burocracia sindical. Para nadie es sorpresa el aval de sectores de la jerarquía eclesiástica a la represión y la tortura o la proximidad de ciertas cúpulas sindicales con el poder militar. Un ejemplo notable de estos acercamientos lo proporciona Hermínio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el partido peronista en las últimas elecciones, que hasta último

momento propagandizó sus simpatías por Monseñor Plaza y aceptó sus vínculos con los sectores más represivos de las Fuerzas Armadas. Otrá muestra, las declaraciones del cura Von Wenich, confesor del general Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y conocido secuestrador de militantes populares que asumió, antes de las elecciones e inmediatamente después de ellas, una actitud francamente provocativa y desafiante ante las autoridades electas y el pueblo mismo.

Pues bien, este pasado, el de los feudos corporativos, es el que se resiste a morir; está claro, asimismo, que no habrá transición posible mientras subsistan las corporaciones y su peso social y político; no habrá democracia mientras estos actores permanezcan al acecho de la política, mientras la sigan transformando en interés gremial inmediato, en pretensión de poder corporativo. Este pasado se resiste a morir; la soberbia militar niega la posibilidad de juzgar a los responsables de la tragedia argentina reciente, rechazando el informe de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, en abierto desacato a las instrucciones dadas por el propio presidente de la república. Abierto desafío a la sociedad, al gobierno y a la naciente democracia. La iniciativa del gobierno para propiciar elecciones libres en los sindicatos terminó en la renuncia del entonces ministro de Trabajo — primera deserción del equipo de Alfonsín — y en el fracaso de la salida propuesta. Frente al debate parlamentario sobre el divorcio, la Iglesia afirmaba que no estaba de acuerdo con referendun alguno ya que tal problema dependía de la voluntad divina y no de la voluntad de los hombres. Los tres frentes corporativos más importantes, que no los únicos, realizan un repliegue ordenado y organizan el contra-ataque.

Lo difícil de la circunstancia se complica por la falta de firmeza y decisión política en el gobierno. El voto por Alfonsín puso en evidencia la demanda social por una posibilidad más civil, laica, igualitaria, política y republicana. Cierto es también que el terrorismo estatal, la guerra perdida en las Malvinas y en general el convulsionado panorama argentino de los últimos años, marcó a fuego el voto de las capas medias que buscaban tranquilidad, paz y trabajo. Este rasgo contradictorio entre el conservadurismo y la posibilidad política de modificar la situación prevaleciente, ha reaparecido con fuerza en la operatividad política del gobierno. A ello se suma la disputa dentro del mismo Partido Radical carente, por momentos, de una homogeneidad política precisa. A la contraofensiva corporativa se opone, muchas veces, una voluntad política débil, preocupada sólo por durar el periodo constitucional y dedicada a la administración de

una crisis frente a la cual pretende adoptar dinámicas autónomas. Existen, sin embargo, síntomas de una modernización de la política que manifiestan audacia por parte del oficialismo y reiteración de la caducidad o, al menos, de la crisis de ciertos valores y caudillajes aglutinantes. El Beagle, por ejemplo, evidenció iniciativa gubernamental ante una oposición que siguió haciendo uso de un discurso patrioterista, guerrillerista y carente de proyección internacional. La misma propuesta "movimientista" permite apreciar una estrategia de ocupación de territorios políticos por parte del radicalismo que consolida su imagen y le permite absorber el amplio espectro de las "políticas posibles"

Este punto nos indica que la transición atraviesa por momentos decisivos. Lo que comenzó a sonar como la posibilidad de fragmentación o atomización del país no es una idea descabellada, es posibilidad real. Dicho en otros términos, la transición puede agotar sus efectos y sus objetivos ante un gobierno que, sin continuidad en la decisión política y con escasa fuerza para garantizarla, asista impotente a pugnas sociales incontrolables (armadas o no). Otros factores contribuyen, en gran medida, a fortalecer esta perspectiva. Destacan, entre ellos, la crisis profunda de los partidos políticos —peronismo sobre todo— y la inmovilidad creciente que la crisis específicamente económica impone. A ella dedicaremos el siguiente apartado.

### 3. La crisis y sus consecuencias

Un año de gobierno y aún no hay plan económico alguno. Previsiones mensuales en un intento de acomodar ciertas expectativas de los agentes se consignan como las únicas medidas asumidas por la conducción económica. La inflación se instala como núcleo de las preocupaciones en tanto fragmenta, erosiona y atomiza el tejido social. Un plan habría indicado la definición sobre quién paga la crisis y su necesario reordenamiento; es decir cualquier plan económico necesita esta definición política elemental y es esto, precisamente, lo que estuvo ausente en la evaluación oficial. Mientras tanto el creciente deterioro de la situación económica no puede sino ser interpretado como la posibilidad económica de la ruptura del tejido social. No hay símbolos mercantiles cohesionadores, el mercado adquiere dinámicas perversas, la producción real se debilita, la violencia monetaria llega a niveles intolerables. La nación como ámbito diferenciado de valorización; como espacio de valorización peculiar, no tiene rumbo alguno. La especulación, la guerra de precios,

el contrabando legalizado, la apertura vía sobrevaluación como apertura indiscriminada, el desmantelamiento de la estructura productiva, dominan la escena. El único capital que llega al país lo hace sólo de manera temporal y dispuesto a valorizarse en los circuitos dinerarios. El inmovilismo que la crisis impone como fenómeno objetivo, sumado a la imposibilidad material de decisiones soberanas en el ámbito dinerario socavan, rápidamente, cualquier iniciativa. Todas las disciplinas específicas del mercado mundial, de las fracciones capitalistas locales, de la deuda y la moneda, acosan al gobierno, agudizan su impotencia, atraviesan sus débiles iniciativas. No hay proyecto, no lo hubo desde un comienzo y la improvisación se paga más temprano que tarde.

El frente externo de las dificultades económicas terminó en derrota, la negativa a firmar con el FMI, las presiones renegociadoras de la deuda, terminaron en marcha atrás. Argentina quedó sola porque ni Brasil ni México acompañaron en los momentos decisivos. Tampoco aquí se podía improvisar: distanciar los problemas internos de los externos o pretender asumir negociación sin proyecto local anunciaba fracaso prematuro.

Si algún pálpito en política habría que reconocer al gobierno de Alfonsín es que identificó, al menos de manera formal, los enemigos; en el terreno económico estuvo ausente el rumbo porque no hubo identidad precisa de los contendientes. La distancia entre economía y política no hizo más que profundizarse a lo largo de estos meses; las iniciativas destinadas al juzgamiento de los militares o el impulso al proceso de normalización sindical contrastaron con el inmovilismo Radical frente a los graves problemas económicos. Sólo el enunciado general de que se protegería, a través del salario, las difíciles condiciones de existencia social de los sectores obreros y populares, de que no se daría curso a programa de austeridad alguno que afectara los niveles de ingresos. Esta buena intención, fácil es percibirlo, quedó atrapada en el reciente acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional; ahora el gobierno insiste en que las medidas a tomar “no serán totalmente antipopulares”. Prebisch, mientras tanto, cuestiona los aumentos retroactivos en los salarios. El resultado, entonces, es que el inmovilismo ante la crisis, el respeto a la lógica objetiva de su funcionalidad destructora, vuelve a señalar, claramente, a los que cargarán con el costo de la misma. El conjunto de los asalariados y fracciones del capital real o productivo sin mayores vínculos con el aparato financiero correrán con la carga y con el costo de una situación que aparenta no tener salida. La protección de los ingresos de los sectores obreros y populares, argumento más político que



estrictamente económico, mostró su debilidad ni bien las disciplinas económicas pusieron las cosas en su lugar.

Mientras tanto, el esfuerzo productivo de millones de argentinos se evapora en los circuitos dinerarios. Un solo mercado de dinero, el interempresario, opera con una magnitud aproximada de 600 millones de dólares que buscan cotización superior a la existente en los circuitos dinerarios institucionales. El promedio de interés diario oscila en un 1%, sin garantías y a cortísimo plazo. El endeudamiento, la morosidad y la incobrabilidad creciente es un fenómeno cotidiano, las quiebras siguen un curso incontenible y el país observa atónito el efecto devastador de la crisis. Mirando el pasado reciente, la pretensión de grandeza, la "Argentina Potencia", suena grotesca. El delirio corporativo de nuestra sociedad arrastró al país a un callejón sin salida.

En economía, contracara material de la posibilidad de la fragmentación, no quedan sino soluciones heroicas. Es decir, salidas que serán necesariamente drásticas pero absolutamente imprescindibles si el gobierno pretende llegar a buen término al cabo de su mandato; mucho más si el viejo compromiso latente de construir una democracia que funde definitivamente un país laico, republicano e igualitario, reaparece con algún ímpetu.

Un primer requisito es, sin duda, identificar los enemigos o, al menos, saber que la economía no es un hecho técnico; registrar también la economía como relación conflictiva entre individuos en donde no hay soluciones únicas ni lógicas exclusivas. Es posible suponer que el acoso corporativo, el acecho del pasado que se resiste a morir constituye hilos invisibles, vínculos necesarios con la economía como terreno apropiado para la desestabilización y el desgaste. El "desorden y el descontrol" se proyectan como imagen caótica a partir del descalabro económico; éste el punto de partida del "desgobierno". Habría que pensar, aquí, que el vínculo tejido entre terrorismo económico y terrorismo político durante los años de la ofensiva iniciada en el '76 se mantendrán e incluso intentarán ampliarse durante los años de retirada y acoso iniciados en diciembre de 1983.

Un segundo elemento a destacar es la absolutamente necesaria actividad de *fortalecimiento estatal* frente a las diferentes fracciones privadas del capital. El reconocimiento de las virtudes innatas de la iniciativa privada fue el eje sobre el cual se construyó el programa del '76. Quiérase o no, el resultado de todo ello se observa hoy como proceso de profundización espontáneo de la crisis; el resultado de las prédicas libertarias para el capital han dado el fruto que todos hoy conocemos: desmantelamiento, descontrol, pérdida de

soberanía en la decisión económica, circuitos dinerarios no institucionales, delitos económicos de todo tipo (delitos de “guante blanco”). La instauración de mecanismos reguladores básicos pasa hoy por el fortalecimiento real de lo público frente a lo privado.

Un tercer aspecto que suena a requisito indispensable de la transición es la politización de la economía que encierra la pregunta de quién paga la crisis y los posibles programas de austeridad. Desde otro punto de vista, deberíamos preguntarnos qué puede ofrecer la transición democrática a las amplias masas del país como distinto a la reconversión salvaje del capitalismo argentino inaugurada en 1976. Podemos imaginar que, aún cuando las medidas y los mecanismos del tránsito sean provisorios e inestables dada la complejidad de las determinaciones, respondan, sin embargo, a la protección elemental de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Esto implica una especie de “traslado” del enfrentamiento: no sólo es contra el FMI tomado como factor disciplinario externo sino que también debe dirigirse contra aquellos que lucraron y se beneficiaron del inicio salvaje y profundamente autoritario de la reorganización necesaria del capitalismo argentino.

Hasta aquí, politizar la economía, consigna básica de los tres elementos mencionados, señala un enfrentamiento necesario entre el Estado y algunas fracciones del capital identificadas como claramente conspirativas, negadoras del control estatal sobre la situación y abiertamente beneficiadas por la dinámica económica del periodo dictatorial. No hay salida económica alguna para la transición si el Estado no se apropia del sistema financiero y no controla abiertamente las actividades generadoras de dinero mundial. En otro sentido, el Estado necesita avanzar sobre el interés y la renta de la tierra, formas del excedente social que cristalizan en sectores parasitarios, conspirativos y con intereses manifiestamente opuestos al interés general de la sociedad. Esto, igualmente, es requisito de autonomía estatal frente a otras fracciones. No habrá fortalecimiento estatal si no se consolida su autonomía financiera, si no se fortalece el capital público como organizador colectivo de las posibilidades valorizadas.

Pero lo anterior es sólo un aspecto de la necesaria politización de la economía. El otro elemento que la constituye es la movilización de los recursos productivos paralizados por la crisis, movilización que sólo será posible en la medida en que la iniciativa de producción se despliegue como iniciativa de masas y, en consecuencia, como violación de la lógica capitalista. Gestión cooperativa de las fábricas cerradas, acuerdos productivos autogestionarios que coloquen como

objetivo de la producción el valor de uso, el producto concreto como producto necesario en la cadena industrial. Estas actividades e iniciativas sólo tendrán espacio en la medida en que se instaure como preocupación social la superación del inmovilismo de la crisis y en tanto se limite la lógica de la ganancia y la eficiencia capitalista.

Politización indica, entonces, fortalecimiento real del Estado y despliegue de las iniciativas de masas; es decir, fortalecimiento de los sujetos sociales —a través de la política— que fueron relegados, atomizados y golpeados en la “refundación” capitalista del 76. En síntesis, “utilizar” la economía como mecanismo esencial de reconstrucción de un tejido social y político favorable a la transición, favorable a la democracia misma.

Una última reflexión. Decíamos antes que un requisito indispensable de este tránsito que Argentina vive es el fortalecimiento del capital público como organizador colectivo de las posibilidades valorizadoras; el capital público como organizador, también, de los espacios productivos que coloquen el valor de uso como producto necesario. Este aspecto incluye, asimismo, el problema de la integración a los movimientos productivos y circulatorios del capital mundial. Es profundamente reaccionario, hoy, pensar en el aislamiento del país, el cierre de fronteras económicas o algo parecido. Los fortalecimientos de los que hablamos —Estado e iniciativa de masas— no implican clausura de nuestro contacto con las modificaciones económicas del universo; son, según pensamos, la posibilidad para que esta integración necesaria no nos ubique como sujetos pasivos, como receptores de los desequilibrios de la economía mundial o como simples absorbedores de mercancías y dinero mundial sobrante por la crisis. Podría pensarse, por ejemplo, en que la capacidad organizadora del capital público incluyera una diferenciación de espacios valorizadores, sectores integrados plenamente al capital mundial, sectores de integración restringida y sectores protegidos. Esto es sólo una intuición que, por cierto, debería desarrollarse.

La necesidad de la política rebasa el ámbito de la disolución necesaria de las corporaciones y se instala, con toda su importancia, en el ámbito económico. La democracia como gestión de la pluralidad y las diferencias debe incluir una visión sobre los modos y las posibilidades que el pueblo tiene para ganarse la vida. En fin, la transición es unidad indisociable de economía y política, compromiso inestable entre ambas. El tiempo corre en contra de las buenas intenciones.

México, D.F., noviembre 1984

- Alberto Spaguolo. Economista argentino. Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F.